



Universidad de los Andes

MARÍA CECILIA CIFUENTES H.
DIRECTORA EJECUTIVA CENTRO ESTUDIOS FINANCIEROS

¿Lástima que terminó? Menos mal

La Tercera
12 de marzo de 2018

Los finales me traen a la memoria la canción del Show de Porky, uno de los clásicos de mi infancia: “Lástima que terminó el festival de hoy... pronto volveremos con... más diversiones”. Sin embargo, el final de este gobierno lo relacionaría más bien con esa canción en su versión negativa “Que alegría que terminó... ojalá no haya retorno”.

Aunque que el exMinistro Eyzaguirre nos haya comunicado que el gobierno de Bachelet nos acercó al desarrollo, para mí ocurrió exactamente lo contrario. Las políticas de este gobierno, pero sobre todo las ideas que lo respaldaron, nos alejaron del desarrollo. El gobierno entrante tiene una tarea titánica para devolver al país a una senda de libertad y progreso, que nos acerque a esa meta en un plazo razonable. Y no estoy hablando simplemente de crecimiento económico, que aunque es condición necesaria para el desarrollo, es insuficiente. Me refiero fundamentalmente a las bases que sustentan el progreso de los países. Porque finalmente los países progresan en un entorno de libertad, producto del esfuerzo y dedicación de sus ciudadanos, quienes en la búsqueda del bienestar individual y colectivo, se esmeran en ser más educados, más cultos, con mayor conciencia social y más productivos. Esos objetivos no se logran por decreto, y nada más contrario al esfuerzo y al trabajo que el Estado Benefactor y sus postulados, que establecen, por el sólo hecho de ser parte de la población, garantías de bienes y servicios entregados por el Estado ¿para qué el esfuerzo entonces?

En las postrimerías de este dañino gobierno, la presidenta Bachelet nos dio a conocer su proyecto de nueva Constitución, que aunque con una viabilidad casi nula, no es sólo un saludo a la bandera como han dicho algunos, ya que vuelve a dejar claramente establecido el rol de este Estado omnipotente que ofrece derechos sociales garantizados, desatendiendo la evidencia de que ello sólo pone trabas en el camino al progreso, y que es aún más dañino en un contexto de fronteras abiertas a una inmigración sin ningún tipo de control.

Para reflejar el punto anterior basta pensar, por ejemplo, en el derecho a jubilación. En más de una oportunidad escuché a la presidenta decir que todo aquel que ha dedicado su vida al trabajo, tiene derecho a una pensión digna. Suena bonito, como ocurre en general con el discurso de los derechos, pero es falso en un mundo de recursos escasos. El sólo hecho de trabajar no puede asegurar a todos el derecho a pensión. Ciertamente, la enorme mayoría de la población mundial

dedica su vida a trabajar, en forma remunerada o no. Bajo la mirada de Bachelet, todos tendrían derecho a que “alguien” les financie su vejez, pero ¿existirá ese alguien dispuesto a hacerlo? Le falta, entonces, una segunda parte al discurso del derecho; la OBLIGACION correlativa de contribuir al sistema, con la sola excepción de aquellos que estén en una condición muy precaria. ¿En qué forma contribuir en este caso concreto de las pensiones? Toda la teoría y la evidencia empírica en esta materia apuntan a que la forma más eficiente y sustentable de contribuir es a través del sistema de capitalización, que además, en forma secundaria respecto a sus objetivos, contribuye al crecimiento de la economía, y por ende, al progreso. Pero ¿tiene incentivo a postergar su consumo presente una persona a la que se le asegura el derecho a una pensión digna por el sólo hecho de trabajar? Probablemente el incentivo es muy escaso, y por ende esa garantía del Estado genera un efecto claramente perjudicial en términos no sólo del progreso, sino también del propio objetivo que se propone. En definitiva, los derechos hay que financiarlos, lo que implica el establecimiento claro de incentivos al estudio, al trabajo, al ahorro, al cuidado de la salud y de la naturaleza, entre otros.

Los efectos negativos de la implementación de derechos sociales no sólo se puede demostrar analizando los incentivos probables que generarían, basta ver los graves problemas que tienen los países desarrollados con sus estados benefactores, y algunos en desarrollo como Brasil, y los enormes costos políticos que les han traído los intentos de revertirlos. El gobierno que acaba de terminar desgraciadamente avanzó en ese camino negativo (hubiera querido avanzar más , el precio del cobre se lo impidió). Luego de que en sus últimas horas como presidenta Bachelet nos mostrara que su negativo ideario inicial sigue intacto, hago votos para que no se le ocurra volver “con más diversiones... ”.